

# ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL

Guillermo Wormald

Sociólogo y Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Desde un enfoque macro social, el sociólogo Guillermo Wormald analiza la vulnerabilidad de los grupos más pobres de la sociedad chilena. Para ello se refiere a tres aspectos principales: El primero, relacionado con la necesidad de asumir un enfoque que considere las complejidades del fenómeno de la pobreza y que permita abordar de un modo más integral las acciones y proyectos que se realizan para su superación. El segundo, orientado a resaltar la importancia de la articulación de los aspectos micro y macro sociales que definen la condición de vulnerabilidad a la pobreza de las personas y familias de escasos recursos. Y, por último, una sección destinada a destacar algunos aspectos que -en el caso de Chile- contribuyen a alentar los esfuerzos existentes para combatir este ineludible problema social.

Las reflexiones en este artículo están motivadas por la petición de la editora de la revista -a quién desde ya le agradezco esta oportunidad- de exponer algunas ideas sobre la vulnerabilidad social que enfrentan las familias pobres en Chile. Ello a partir del trabajo que, junto con otros autores, desarrollamos en el libro "Trabajo y Ciudadanía" publicado el año recién pasado y que ha servido como marco de referencia para una investigación sobre la dinámica de la pobreza en algunos campamentos de la Región Metropolitana, realizada dentro del programa "Un Techo Para Chile". Dado que esta última investigación se concentra en una descripción de los aspectos microsociales que caracterizan a las familias que viven en dichos campamentos (tales como: El capital humano, social y familiar con que ellos cuentan, la dinámica y el ciclo familiar, entre otros) me han pedido referirme a los aspectos macrosociales que tienen influencia en la condición de vulnerabilidad de los grupos pobres.

## I. LA POBREZA COMO UNA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL

Según recientes estimaciones, un 34,6% de la población en América Latina aún vive en condiciones de pobreza, vale decir, perciben ingresos -medido como ingreso familiar per cápita- que se ubican por debajo de la línea de pobreza en sus respectivos países (Castro, 2003)<sup>1</sup>. En

el caso de Chile, como bien sabemos, esta proporción es menor alcanzando a un 20,6% del total de la población del país (CASEN 2000). Si bien estas cifras permiten dimensionar la magnitud del problema que tenemos por delante, tienen la limitación de reducirlo a un aspecto puramente material que conduce -en algunos casos- a una comprensión relativamente mecánica de algo que se asume como una condición social más o menos homogénea. Se es o no pobre según se esté por encima o por debajo de una determinada condición de ingreso. La razón para ello es que se piensa que la pobreza es, primero y fundamentalmente, una situación de carencia material.

Sin negar la importancia de esta dimensión, son muchos los trabajos -incluido el nuestro- que han puesto de relieve el carácter multifacético, heterogéneo y más bien dinámico del problema que nos preocupa. Como señalábamos en el libro que mencionamos al inicio de este artículo, si bien la pobreza refiere a un problema de carencia de recursos materiales -especialmente ingreso- para satisfacer las necesidades mínimas de los miembros de un hogar, encierra un problema más complejo que se relaciona con las consecuencias que tiene el funcionamiento del sistema económico y social sobre las oportunidades de integración al empleo y al bienestar social de los diferentes segmentos sociales, incluido naturalmente los más pobres. Por eso, hoy en día, la comprensión del fenómeno

<sup>1</sup> Según las estimaciones del autor y considerando 17 países del continente, alrededor de 180 millones de personas de América Latina vivían bajo la línea de la pobreza en 1998. De éstos, 102 millones vivían en áreas urbanas y 78 millones lo hacían en áreas rurales.

de la pobreza y sus posibles causas hay que asociarlo a las oportunidades de inclusión/exclusión que brindan el mercado, el estado y la propia sociedad en el marco de un proceso de desarrollo crecientemente global que, en el caso de un país como el nuestro, ha redefinido los canales y formas institucionales de integración social.

Dentro de esta perspectiva el análisis de la pobreza reconoce dos dimensiones centrales. Por una parte, una dimensión macrosocial referida a la oferta institucionalizada de oportunidades de integración social al trabajo/empleo, educación, salud y previsión social, entre otras y, por la otra, una dimensión micro social relacionada con los recursos y capacidades que tienen y movilizan los pobres para aprovechar estas oportunidades. Cabe señalar que ambas dimensiones están estrechamente relacionadas. Las oportunidades, si bien tienen un carácter objetivo, sólo logran concretarse si las personas tienen capacidad de reconocerlas y aprovecharlas.

En consecuencia, el enfoque que proponemos, pone de relieve la importancia de centrar el análisis de la pobreza y de las acciones para combatirla en la oferta de oportunidades de integración social y en los recursos y capacidades que tienen las personas y sus familias para acceder a ellas; vale decir, transformarlos en activos. Esta relación es por definición dinámica y cambiante y a ella se asocia el riesgo de permanecer o caer en una situación social de pobreza. La pobreza, por lo tanto, más que una simple condición de carencia material es una condición dinámica de vulnerabilidad social definida por el riesgo que enfrentan algunas personas y hogares de no ser capaces de mantener o mejorar sus ya precarios niveles de inserción y bienestar social.

Esquemáticamente esto puede ser graficado del siguiente modo:

Por lo tanto, desde esta perspectiva, lo importante para estimar la condición de vulnerabilidad de los pobres es reflexionar acerca de la relación entre ambas dimensiones teniendo siempre presente que los pobres no conforman una categoría homogénea y que se enfrentan a un entorno cambiante que puede dificultar o favorecer sus oportunidades de integración social. Sin embargo, en lo que sigue, sólo quisiera señalar algunos aspectos generales de esta relación a partir de la evolución que ha experimentado la estructura de oportunidades (dimensión macro) durante la última década, especialmente en el ámbito urbano.

## II. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES Y VULNERABILIDAD SOCIAL DE LOS POBRES URBANOS

Como bien sabemos, uno de los cambios más significativo ocurridos en el seno de la sociedad chilena durante las últimas dos o tres décadas, ha sido el cambio de orientación en el modelo de desarrollo. El actual modelo supone la apertura a la competencia en un mundo cada vez más global el cual, va imponiendo ciertas reglas de funcionamiento a las economías y sociedades -que como la nuestra- lo asumen como camino de crecimiento e integración social.

Desde el punto de vista que nos interesa, este cambio ha estado marcado por la creciente centralidad que ha ido adquiriendo el capital privado y el mercado como oferentes de oportunidades de integración social. Ellos han tendido a complementar la acción que tradicionalmente desarrollaba el Estado en la provisión de bienestar social,

<b>Nivel Micro Social</b> (Recursos y capacidades de personas y hogares)	<b>Nivel Macro Social</b> (Estructura de oportunidades institucionales)
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> Capacidades de las personas:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ej. capital humano del jefe de hogar, su cónyuge y de los otros miembros</li> </ul> </li> <li><b>b)</b> Recursos de los hogares                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materiales</li> <li>▪ Capital trabajo</li> <li>▪ Capital social y familiar</li> <li>▪ Capital cultural</li> </ul> </li> <li><b>c)</b> Estrategias de movilización de los recursos personales y de los hogares. Capacidad de movilización de recursos (ie transformación en activos) para acceder a oportunidades sociales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> Mercado de trabajo</li> <li><b>b)</b> Oferta de salud</li> <li><b>c)</b> Oferta de educación</li> <li><b>d)</b> Oferta de previsión y seguridad social</li> <li><b>e)</b> Capital social comunitario</li> </ul>
<b>Vulnerabilidad Social a la Pobreza</b> (Riesgo de las personas y de sus hogares a permanecer o caer en una condición de pobreza)	

lo cual se ha traducido en una ampliación de la estructura de oportunidades y en una redefinición de las formas de integración social. En la práctica, el nuevo modelo ha generado una estructura segmentada de acceso al bienestar social conforme a la condición socioeconómica de cada cual que encierra el peligro de acentuar los niveles de desigualdad social.

### **a) Oportunidades de educación y vulnerabilidad**

Como aparece en el diagrama anterior, uno de los recursos fundamentales para incrementar el acceso al bienestar y reducir la condición de vulnerabilidad de los pobres se relaciona con las oportunidades de incrementar el capital humano de cada cual mediante la inversión educacional. Sin embargo, como lo muestra la experiencia en las sociedades desarrolladas, es importante considerar que la educación, por una parte, se constituye en una herramienta privilegiada para promover la igualdad de oportunidades y mejorar las formas de integración social y, por la otra, también contribuye a reproducir la desigualdad social en la medida que el acceso a ella esté directamente afectado por la condición socioeconómica preexistente. La situación en nuestro país tiende a ratificar esta experiencia.

En efecto, a lo largo de estas últimas décadas se ha producido una importante expansión de las oportunidades educacionales que ha tendido a incrementar los niveles de escolaridad de la población en su conjunto. Ello ha repercutido en una importante mejoría intergeneracional en los niveles de escolaridad. De hecho, si comparamos - a partir de los datos aportados por una encuesta reciente - los niveles educacionales de los entrevistados con aquellos alcanzados por sus padres se puede concluir que el 42% de ellos mantiene el piso de educación heredado de sus padres, alrededor de un 50% lo aumenta y sólo un 9% lo disminuye, situación que tiende a ser más favorable en el caso de la población más joven. Asimismo, del total de entrevistados con padres con educación secundaria incompleta, más del 50% avanzó respecto al nivel de sus padres completando la secundaria o alcanzando el nivel post-secundario. Finalmente, en la generación de los más jóvenes (ie. 24 a 35 años), un tercio de los que alcanzan educación post-secundaria tienen padres con niveles educacionales bajos (ie. primario o menos)<sup>2</sup>. De algún modo esto grafica el alto valor que se le asigna a la educación en el país y el gran esfuerzo educacional que hacen

los padres por educar a sus hijos, especialmente en los hogares pobres.

Sin embargo este proceso se ha visto contrabalanceado por un acceso fuertemente segmentado a las oportunidades de educación y por un proceso de devaluación educativa que afecta negativamente a las personas de menores recursos restringiendo sus posibilidades de integración y movilidad social.

En general los miembros de hogares de menores recursos y con una baja dotación de capital social y cultural -y por lo tanto con una menor dotación de información y contactos- acceden a establecimientos educacionales con menores recursos y que brindan oportunidades educacionales más limitadas. Los datos señalan que, en 1998, un 62,9% de los alumnos que asistían a los establecimientos que se ubicaron en el cuartil más alto de rendimiento de la prueba SIMCE -aplicada a nivel nacional para los alumnos que asisten a segundo medio- provenían de familias de altos recursos, contra sólo un 3,0% que provenían de familias de escasos recursos. Ello significa que el aprendizaje y rendimiento académico, de los mismos años de estudios, es muy diferencial según el tipo de establecimiento y la condición socioeconómica de origen. A esto se suma que la escolaridad promedio que alcanzan los miembros de los hogares más pobres es significativamente menor que la de los estratos superiores y que la tendencia durante la década de los años 90 ha sido hacia una ampliación de esta diferencia<sup>3</sup>.

De este modo, los efectos específicos de igualación de oportunidades que entrega la educación están fuertemente determinados por el grado de cobertura y calidad del sistema educacional. En el caso nuestro, las desigualdades en la calidad de la provisión educacional -y por lo tanto de los logros educacionales- tienen efectos en la reproducción de la vulnerabilidad social de los grupos de menores recursos.

Por otra parte, el aumento de los años de escolaridad de la población en general se ha traducido en un proceso de devaluación educativa que tiende a erosionar este mismo logro. Un reciente estudio realizado sobre la base de los últimos datos censales concluye que:

“La educación básica y media incompleta conduce cada vez más a categorías laborales de no calificado. En 1992, un 30,5% de las personas con educación básica completa era trabajador no calificado; en el año 2002, un 42,6% de los ocupados con educación básica están en empleos no calificados. Por otra parte, en 1992 un cuarto de las

<sup>2</sup> Estos datos provienen de una encuesta de movilidad social realizada en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile en año 2000. Esta encuesta se aplicó a una muestra aleatoria de 3500 jefes de hogar varones de entre 24 y 69 años de edad representativa a nivel nacional, salvo las regiones XI y XII no consideradas en el estudio.

<sup>3</sup> En 1998 el promedio de escolaridad que alcanzaban los miembros de los hogares pobres (quintil 1) de la Región Metropolitana era de 8,3 años de estudio, en tanto que los del quintil 5 (superior) alcanzaban un promedio de 13,4 años. Por su parte, la diferencia en el promedio de escolaridad que alcanzaban unos y otros aumentó a favor del quintil superior de 4,5 años en 1990 a 5,1 años en 1998 (G. Wormald, et al, 2002).

---

personas con educación media-humanista completa accedía a “empleos de oficina; en 2002 sólo lo hace un 15.0% (Herrera, S y Valenzuela E, 2003).

De este modo, crecientemente la barrera educacional que es necesario superar para obtener una inserción laboral de buena calidad tiende a ser la educación media completa, logro que aún es difícil de alcanzar para muchos de los miembros de los hogares de menor condición socioeconómica. De hecho la OIT (1998) señala que, dada la cobertura educativa actual, un joven chileno que no haya concluido la educación secundaria tiene pocas posibilidades de percibir ingresos que superen la línea de pobreza.

### **b) Oportunidades de trabajo y vulnerabilidad**

Un segundo factor macrosocial de vulnerabilidad a la pobreza se relaciona con el funcionamiento actual del mercado de trabajo.

Como bien se sabe el acceso al trabajo y la movilización del recurso-trabajo de los hogares (ie de los miembros del hogar que pueden y están en condiciones de trabajar) es el activo más importante para reducir la vulnerabilidad a la pobreza. Según datos de la CASEN, 2000, el 82,2% del total de los ingresos que reciben los hogares del quintil 1 (más pobre) provienen del trabajo de sus miembros. Por otra parte, es un hecho que los hogares en los cuales trabajan más de una persona reducen significativamente su vulnerabilidad a la pobreza.

Sin embargo, la estructura de oportunidades de trabajo a lo largo de la década del 90 ha evolucionado de un modo desigual afectando las posibilidades de integración de los más pobres. Los datos señalan que a lo largo de períodos de crecimiento y expansión de la demanda de trabajo (Ej. 1990-96) las tasas de desempleo son significativamente más altas entre los trabajadores y jefes de hogar de los quintiles inferiores. Naturalmente este fenómeno se refuerza durante períodos de contracción económica (Ej. 1998-2000)<sup>4</sup>.

Los datos también señalan que si bien la incorporación de las mujeres al trabajo ha sido creciente a lo largo de la década, ella ha sido muy diferencial por condición socioeconómica de los hogares. En general, en los hogares más pobres, la proporción de mujeres que trabajan -o que pueden trabajar dado las limitaciones que enfrentan en sus propios hogares y en el mercado de trabajo-

es mucho menor que en los hogares de mejor condición socioeconómica. A esto se agrega que cuando trabajan, por lo general reciben una menor remuneración que los hombres por su trabajo, cuestión que se agrava si se piensa que la proporción de hogares urbanos indigentes y pobres encabezados por mujeres ha tendido a aumentar entre 1990 y 1999 (I. Arriagada, op-cit.). Finalmente, los datos censales indican que muchas mujeres trabajadoras, al igual que los hombres, lo hacen fuera de su comuna de residencia lo que les dificulta la compatibilidad entre familia y trabajo.

Por otra parte, a lo largo de estos años se ha producido una expansión de los buenos y de los malos empleos, lo cual no ha estado necesariamente ligado a los períodos expansivos o recesivos de la economía. Es así como la proporción de trabajadores urbanos en ocupaciones sin un contrato escrito de trabajo aumentó sostenidamente desde un 14,2% a comienzos de la década hasta un 21,6% al término de la misma. Algo similar ocurrió con la proporción de los que no cotizan previsionalmente. Y, como era de esperarse, son los trabajadores pertenecientes a los hogares de menores recursos los que acceden en mayor proporción a este tipo de empleo (G.Wormald, et. al, 2002). Cabe señalar que la mayor precarización del empleo ocurre al interior de los sectores de la construcción, transporte, comercio y servicios personales que son de los más dinámicos en término de la generación de empleo y en los cuales se concentra una alta proporción de trabajadores de menores recursos y baja calificación. La implicancia de este fenómeno es que crecientemente se observa -tanto en las empresas grandes y muy especialmente entre las chicas y los trabajadores informales por cuenta propia- un paulatino divorcio entre el acceso al ingreso y a la protección social que usualmente proveía el trabajo. Hoy, especialmente en períodos de crecimiento, es posible que los miembros de los hogares pobres accedan a trabajo que brindan ingresos más o menos adecuados. Sin embargo, nada garantiza que eso se traduzca en un acceso a la protección social. Esos trabajos, amén de inestables, pueden ser precarios y desprotegidos lo que es particularmente preocupante cuando afecta al jefe de hogar.

Esta es una de las razones de por qué la medición de la pobreza cuando se hace, sólo en términos de ingreso, es limitada. Vale decir, en las condiciones de funcionamiento económico actual, es perfectamente posible que se dé una situación de reducción de los niveles absolutos de

---

<sup>4</sup> Según datos de la CASEN, en 1996, la tasa media de desempleo entre los trabajadores de la Región Metropolitana era de 5,0%, en tanto que entre los trabajadores del quintil inferior esta tasa subía hasta un 14,2%. En 1998, la tasa media había subido a 9,7% y la de los trabajadores más pobres hasta 31,4%.

pobreza (% de hogares sobre la línea de pobreza) pero en el marco de un aumento de su vulnerabilidad social. De aquí la importancia de avanzar hacia una mayor flexibilización del mercado de trabajo (en aras de la mayor competitividad) sin que ello implique una mayor precarización del empleo. De lo que se trata, como bien lo ha planteado la OIT, es de la generación de trabajos “decentes” en aras de maximizar las oportunidades de integración social.

### ***c) Factores demográfico y culturales que afectan el capital social de los pobres***

Del diagrama presentado con anterioridad también se desprende que otros recursos importantes para reducir la vulnerabilidad a la pobreza son el capital social y familiar con que cuentan los hogares, así como también la dinámica y estructura familiar. Mirado desde un punto de vista macrosocial, estos recursos están afectados por tendencias sociodemográficas y aspectos culturales que son necesarios de considerar.

Los datos señalan que, especialmente en el ámbito urbano, la proporción relativa de familias extendidas ha tendido a decrecer al igual que las familias compuestas, en tanto que se tiende a consolidar como tipo dominante la familia nuclear (padre, madre e hijos) y a aumentar los hogares unipersonales. Asimismo, se constata que el tamaño medio de los hogares urbanos ha tendido a decrecer, tanto en los sectores altos como en los bajos (I. Arriagada, 2001). Si bien existen antecedentes que señalan que el menor tamaño relativo de los hogares está relacionado con una mayor probabilidad de situarse por encima de la línea de pobreza (R. Castro, 2003), las tendencias anteriores también indican una posible erosión del capital familiar en la medida que los nuevos núcleos son cada vez más reducidos.

Desde el punto de vista del capital social existen, a lo menos, dos consideraciones relacionadas con aspectos macrosociales que lo pueden afectar.

Una es la tendencia hacia una creciente segmentación urbana que puede contribuir a un mayor “aislamiento” relativo de los grupos más pobres (P. Sabatini, et.al, 2000). Se sabe que los grupos sociales de menores recursos tienden a constituir redes relativamente homogéneas (fundadas en vínculos fuertes entre parientes y amigos cercanos) que son un apoyo real, especialmente en momentos de crisis. Sin embargo, estas redes son pobres en proveer información y contactos para mejorar sus condiciones de integración social. El problema es que la tendencia a constituir áreas urbanas de “pobres rodeadas de pobres” acrecienta la homogeneidad de las redes.

La otra es la tendencia -relacionada con la anterior- hacia el incremento de la desconfianza social. Esto ocurre, tanto al interior de los grupos de menores recursos, como entre ellos y el resto de la sociedad. Los datos muestran que nuestra sociedad se caracteriza por altos índices de desconfianza social, y ésta, tiende a ser mayor entre los estratos más bajos. Este fenómeno se ha visto agravado por el aumento de los índices de criminalidad que afecta tanto a pobres como a no pobres y que lleva a reforzar comportamientos de mayor aislamiento social. Casas enrejadas en un caso y condominios con guardias privados en el otro son ejemplos visibles de una sociedad marcada por la desconfianza social. Adicionalmente, el mayor aislamiento y la criminalidad -que en el inconsciente colectivo se vincula con pobreza- alientan una estigmatización de los pobres por parte de los no pobres la que, en definitiva, aumenta las distancias sociales.

### **III. REFLEXIONES FINALES**

Hasta aquí hemos destacado algunos nudos problemáticos que apuntan a la relación entre aspectos micro y macro sociales que afectan la vulnerabilidad a la pobreza de las personas y sus hogares. En lo que sigue, me interesa extraer algunas conclusiones y señalar algunos hechos alentadores que contribuyen a reducir los factores de vulnerabilidad de las familias pobres en nuestro país. La perspectiva en que nos hemos situado conduce a tomar conciencia que, si bien los pobres son sujetos activos de su propio desarrollo, existe un conjunto de factores micro y macro sociales que interactúan de un modo dinámico y que pueden favorecer u obstaculizar el esfuerzo que ellos despliegan para superar su condición de inserción social.

Desde un punto de vista macrosocial, el factor clave para la ampliación de la estructura de oportunidades -especialmente en el caso de una sociedad de mercado como la nuestra- es el crecimiento económico. Sin embargo, es importante comprender que la pobreza no es sólo una condición de carencia material, sino una situación más compleja de vulnerabilidad social que se relaciona con los recursos, capacidades y oportunidades institucionales que brindan el mercado, el estado y la propia sociedad. De este modo, en un país como el nuestro que ha experimentado altos índices de crecimiento, la reducción de la pobreza material absoluta -que ha sido un hecho para un número importante de familias de escasos recursos- se ha visto contrabalanceado por el desarrollo de algunas tendencias -como las aquí descritas- que alientan formas de inserción social precarias y que, en esta misma medida, aumentan el riesgo de permanecer en una situación de

vulnerabilidad a la pobreza. En este sentido, el desafío social que aún tenemos pendiente es, no sólo la reducción y eventual erradicación de la pobreza extrema, sino el avance por la senda de un crecimiento que amplíe las oportunidades de acceso a la ciudadanía social.

En el marco actual -con alrededor de un 20% de las personas viviendo bajo la línea de pobreza y con la existencia de importantes niveles de desigualdad social- parece fundamental apelar a una acción conjunta y cada vez mejor coordinada entre las empresas, el estado y las diversas organizaciones de la sociedad. Estas acciones debiesen orientarse a favorecer el desarrollo de los recursos, capacidades y activos de los grupos más vulnerables. Al respecto me parece que existen algunos hechos alentadores.

De parte del sector privado y de las empresas -especialmente las más grandes- está surgiendo una creciente preocupación por avanzar en la senda de una mayor responsabilidad social, la cual se verá potenciada por los acuerdos internacionales de competencia global. En la práctica, ello debiese traducirse en mejores condiciones de trabajo para sus propios empleados (responsabilidad interna), al igual que en nuevas iniciativas orientadas a favorecer los vínculos de las empresas con el desarrollo de su entorno social. (responsabilidad externa). Vincularse con estas iniciativas y reforzar los lazos de confianza entre las empresas, los municipios, ONGs y la propia comunidad con vistas a potenciar un plan de acción común, es uno de los desafíos pendiente.

Por otra parte, a lo largo de estos años, se han hecho avances en la focalización y utilización de los recursos utilizados por el Estado para combatir la pobreza. Esto es fundamental seguir perfeccionándolo ya que, la acción de un Estado socialmente eficaz, es un requisito de primera importancia para garantizar un mínimo acceso a la ciudadanía y bienestar social. Especialmente, en una sociedad como la nuestra, en la cual la inmensa mayoría de la población -incluido naturalmente los más pobres-, siguen dependiendo del Estado para acceder a bienes tan esenciales como la vivienda, la salud y la educación. Hoy en día, en la bondad de las políticas del Estado, se juega buena parte del principio de igualdad de oportunidades sociales en favor de los más pobres.

Por último, es cada vez más claro el aporte insustituible que comienzan a jugar las organizaciones de la sociedad civil en la reducción de la vulnerabilidad que enfrentan las personas y hogares de menores recursos. Existen importantes iniciativas -por ejemplo, en el ámbito educacional- orientadas a entregar una educación de calidad a los niños de hogares de menores recursos. Adicionalmente, estamos viviendo un momento de expansión de las acciones del voluntariado que ha ido acompañada de una re-

valorización social de sus acciones y una profesionalización en la gestión de algunas de las organizaciones que los agrupa. (S. Zulueta, 2003).

Los datos muestran que quienes despliegan estas acciones solidarias -sea por razones altruistas o más egoístas de satisfacción personal- son personas de estratos medios y altos con niveles educacionales sobre el promedio de la sociedad. El resultado es que cada vez se moviliza mejor el potencial de solidaridad existente en la sociedad. De este modo, se incrementan las redes heterogéneas entre grupos sociales de diferente condición socioeconómica lo que mejora la información y contactos de los más pobres.

En esta línea, el desafío futuro parece ser el desarrollo de organizaciones con un nivel de profesionalización tal, que les permita una adecuada interrelación con el sector público y privado, así como también una coordinación con los diversos actores a través de redes horizontales, fundadas en la confianza y en el logro de objetivos comunes.

## Bibliografía

### Arriagada Irma

2001 "Familias latinoamericanas. Diagnóstico y políticas públicas en los inicios del nuevo siglo", Serie de Políticas Sociales, CEPAL, Santiago.

### Castro Rodrigo

2002 "Pobreza en América Latina: Tendencias (1986-1998 y Determinantes)" Serie Informe Social, Instituto Libertad y Desarrollo, Santiago.

### Herrera, Soledad y Valenzuela, Eduardo

2003 "Movilidad Social en Chile" Informe preliminar, ISUC.

### Sabatini, Francisco, Cáceres Gonzalo y Cerda Jorge

2000 "Segregación residencial en las principales ciudades chilenas; Tendencias de las últimas décadas y posibles recursos de acción". Revista EURE, Vol 27 N° 82.

### Wormald Guillermo, Cereceda Luz E y Ugalde Pamela

2002 Metropolitana de Santiago de Chile en los años noventa" En Kaztman Rubén y Wormald Guillermo, Trabajo y Ciudadanía. CEBRA editores, Montevideo.

### Zulueta, Sebastián

2003 La evolución del voluntariado en Chile entre los años 1990 y 2002, Tesis de grado, Magíster en Sociología, PUC.